ARGENTINA

Por *Fernando García Olano*,
Carlos María Bidegain y
Guillermo Carlos Schinelli *

INTRODUCCIÓN

Como lo hace patente el título de esta obra, el informe que presentamos se refiere solamente a la materia civil y comercial con exclusión de la penal, que reviste características singulares. A la limitación *en razón de la materia* que dejamos consignada, estimamos prudente agregar otra *en razón del territorio*. Argentina es un Estado *Federal*, integrado a la fecha por la capital de la nación (ciudad de Buenos Aires), veintidós Provincias y un Territorio nacional (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud). Conforme a la Constitución nacional, sancionada en 1853 y reformada en 1860, 1866, 1898 y 1957, corresponde a la Nación “dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, y de trabajo y seguridad social” (artículo 67, inciso 11) y a las Provincias que “conservan todo el poder no delegado” (a la Nación: artículo 104), dictar sus propias leyes procesales.¹ En consecuencia, las Provincias han dictado sus propios códigos de procedimiento, algunos de los cuales reglamentan detalladamente lo relativo a cooperación judicial;² ello no obstante, por ser la ciudad de Buenos Aires el centro político y económico de la Nación y porque los principios sentados en la capital son similares a los establecidos en las provincias nos limitaremos al tratamiento de lo que ocurre en dicha ciudad capital en punto a cooperación judicial internacional (lo que diga valdrá también para el Territorio nacional, situado en el extremo sur del país).

* La Introducción, la Sección I y el Apéndice son de la autoría del doctor Fernando García Olano; la Sección II del doctor Carlos María Bidegain. El doctor Guillermo Carlos Schinelli los revisó y actualizó.

Y para terminar con la precisión del tema que nos ocupa, dejamos constancia de que prescindiremos también de la práctica de algunos países de encomendar a sus cónsules el diligenciamiento de exhortos para producir emplazamientos, notificaciones y pruebas en general, en lugar de remitirlos a los tribunales competentes,³ limitándonos a los exhortos provenientes del exterior dirigidos a la judicatura argentina.⁴ En tal materia existe en Argentina una tradición de cumplimiento, sea que ellos deban ejecutarse por los jueces nacionales o por los provinciales, sin más limitaciones que las provenientes de orden público. Y ello respecto de todas las etapas del pleito, desde la notificación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, con las medidas intermedias probatorias y de otra naturaleza que fueren necesarias. Así Argentina luce entre los países que consideran la cooperación judicial internacional como un deber de la judicatura de todos los Estados en el interés de la justicia.

SECCIÓN I

Cumplimiento por los jueces argentinos de medidas procesales dictadas por los jueces extranjeros

1. Generalidades

Según acabamos de anticipar, la cooperación judicial internacional se realiza mediante el *exhorto* o *carta rogatoria* (o *comisión rogatoria*), que es el despacho en el que el juez extranjero solicita a la judicatura argentina la realización de diligencias determinadas, sean ellas citatorias, probatorias, precautorias o de otra índole. El juez exhortado cumple la diligencia como si hubiera sido dispuesta por él mismo y, una vez cumplida, devuelve las actuaciones al juez exhortante.

Ahora bien, el régimen de los exhortos, tanto nacionales, los que se libran dentro del país: *id. est.*, por un juez a otro de distinta jurisdicción, como internacionales (sea los provenientes del extranjero, sea los que se libran al extranjero), se ha articulado sobre la base del Código de procedimiento en materia civil y comercial vigente en la capital desde 1881 hasta 1968, que establecía que los jueces, siempre que sea necesario, pueden comisionar a los de otras localidades para diligencias determinadas (artículo 2º). La Ley 50, que constituía un verdadero Código de procedimiento para la justicia "federal",⁵ era pacífica al respecto. Dichos Códigos y Ley fueron sustituidos a partir del 1º de febrero de 1968 por el Código procesal civil y comercial de la Nación, que permite también encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas (artículo 3º

Vide además artículo 132, 2a. parte, según el que las comunicaciones que se reciban de las autoridades judiciales extranjeras se regirán por lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales y en la reglamentación de superintendencia). Ajustado a la precisión del tema previamente formulada nos referiremos a continuación sólo a los exhortos provenientes del extranjero que deben ser cumplidos por los jueces de la Capital (y/o del Territorio nacional), a cuyo efecto señalamos desde ya cuatro etapas en su tramitación: 1a.) libramiento del exhorto por el juez exhortante, 2a.) remisión del exhorto al juez exhortado, 3a.) diligenciamiento del exhorto y 4a.) devolución de las actuaciones por el juez exhortado al juez exhortante. Prescindo de la última etapa, de trámite idéntico aunque en sentido inverso a la segunda, y paso a considerar por separado las tres primeras.

2. *Recaudos*

Los exhortos de jueces extranjeros deben llenar determinados requisitos, que pueden resumirse así:

a) Indicar la persona que ha de correr con el diligenciamiento del exhorto ante la autoridad judicial a la que va dirigido, así como sufragar los gastos que ocasionaren las diligencias en el caso de que fuere librado a petición de parte interesada;⁶

b) Llevar la legalización del agente consular argentino acreditado en la jurisdicción de la autoridad extranjera de que el exhorto proviene (en caso de falta o ausencia del agente consular argentino, la del agente diplomático y, a falta de él, la del agente diplomático o consular de una nación amiga), cuya firma será legalizada, a su vez, en Argentina por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.⁷ En ningún caso la legalización consular (o diplomática) Argentina podrá ser suplida por la del agente diplomático o consular acreditado en Argentina por el país de donde el exhorto emana. Como excepción y en virtud de convenciones especiales los exhortos provenientes de Bolivia,⁸ Brasil,⁹ Chile,¹⁰ España,¹¹ Italia,¹² Paraguay,¹³ Perú¹⁴ y Uruguay,¹⁵ no necesitan legalización de firmas cuando son cursados por intermedio de los agentes diplomáticos o consulares.¹⁶

c) Ser acompañados de su traducción al idioma nacional efectuada por un traductor público inscripto en la matrícula respectiva, la que debe comprender la totalidad del exhorto y ser ratificada ante la autoridad judicial a la que va dirigida.¹⁷

3. Remisión

Los exhortos del extranjero pueden ser remitidos: *a)* por la vía diplomática, en cuyo caso el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto los remite, a su vez, a las autoridades judiciales correspondientes, o *b)* directamente a la persona autorizada para su diligenciamiento (que por lo general, es un miembro de la profesión legal), la que lo presenta también ante el tribunal que corresponda por intermedio de un procurador inscripto en la matrícula respectiva.¹⁸

4. Competencia

En tal estado, el juez exhortado da vista al fiscal a los efectos de la competencia y pago de la tasa judicial.¹⁹ Oído el fiscal, puede negarse a dar curso al exhorto por los siguientes motivos: *a)* cuando no reúne los requisitos formales reseñados *supra*,²⁰ *b)* cuando invade su propia jurisdicción,²¹ *c)* cuando vulnera principios de orden público resguardados por la legislación nacional y *d)* cuando tiene origen en un juez de inferior jerarquía del exhortado, en cuyo último caso debe remitirlo al que fuese competente.

5. Ley aplicable

El cumplimiento del exhorto, de conformidad con la regla *locus regit actum*, está sujeto en principio a la ley procesal vigente en la jurisdicción del juez exhortado.²² Y decimos “en principio” pues se admite también que su ejecución se realice en la forma solicitada por el juez exhortante sobre la base de su propia ley de rito, aunque no coincida con la correspondiente al juez exhortado, siempre que aquélla no viole a ésta en sus fundamentos y pueda ser admitida sin violencia.²³ De manera que nada se opone a que se precise en el exhorto la forma y plazos en que debe realizarse una diligencia (por ejemplo una prueba de testigos).

6. Facultades del juez exhortado

Dado que la *forma* de practicar el diligenciamiento del exhorto queda sujeta en principio a la jurisdicción del juez exhortado, él puede resolver las incidencias que se susciten con recurso ante su propia cámara de apelaciones. Pero siendo limitadas sus facultades, no pueden plantearse en principio ante el juez exhortado cuestiones de *fondo*, cuya resolución corresponde al juez exhortante. En otras palabras: suscitada una incidencia

en un exhorto, debe dilucidarse previamente si ella se refiere al ritual a observar en el diligenciamiento o sí, por el contrario, tiene relación con la sustancia del asunto. En el primer supuesto, el juez exhortado puede resolver la incidencia aplicando su propia ley procesal; en el segundo, debe abstenerse de hacerlo, devolviendo la rogatoria al juez exhortante para que él la resuelva con los autos a la vista.²⁴

7. *Facultades del autorizado para el diligenciamiento*

La persona autorizada para correr con el diligenciamiento del exhorto tiene las facultades que se consignan en el mismo. En su defecto, se presume que está investida de las necesarias para el mejor cumplimiento de la medida solicitada, incluida la de deducir recursos que hagan al diligenciamiento pero excluida la de suplir las omisiones observadas en el exhorto.

Tratándose de un exhorto librado para la recepción de prueba testimonial, se ha resuelto que el autorizado por la parte proponente no puede ampliar el interrogatorio acompañado al exhorto;²⁵ a su vez, el autorizado para intervenir por la parte contraria a la proponente de la prueba puede formularle repreguntas (aunque no obren en el exhorto), siempre que en él conste que se encuentra facultado para ello.²⁶

8. *Regulación de honorarios*

La jurisprudencia no es uniforme acerca de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en el diligenciamiento de los exhortos nacionales, pues en unos casos se ha atribuido al juez exhortado y en otros al exhortante. Pero tratándose de exhortos internacionales, no cabe duda que la facultad de regular los honorarios corresponde al juez exhortado; la solución contraria obligaría a dichos profesionales a pedir regulación en el extranjero con las consiguientes molestias.²⁷

SECCIÓN II

Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

1. *Generalidades*

El derecho argentino reconoce, en principio, eficacia en el territorio de la República a la sentencia dictada por tribunal extranjero. Pero el reconocimiento de eficacia depende de la satisfacción de determinados requisitos.

Estos se encuentran establecidos en tratados y en leyes procesales. Estas últimas, dado el carácter federal de la organización de Argentina, son distintas en cada provincia y en la Capital Federal (ciudad de Buenos Aires) y demás lugares sujetos a la jurisdicción federal. Tal como lo hicimos anteriormente, limitaremos nuestro examen a las normas vigentes en el código procesal para los tribunales nacionales (de la Capital Federal y de la Justicia Federal en todo el país). La legislación provincial no difiere sustancialmente de esta última.

2. *El juicio especial de exequatur*

El reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras están sujetos a estos principios generales: *a)* dichas sentencias tendrán la fuerza que establezcan los tratados celebrados por la República con países extranjeros; *b)* en defecto de tratados, tendrán fuerza si satisfacen determinados requisitos (artículo 517, código procesal).

La verificación de esos recaudos se efectúa en un juicio especial de *exequatur*.²⁸ Este juicio tiene por objeto comprobar la competencia internacional del juez que ha pronunciado la sentencia extranjera y la satisfacción de los demás requisitos que el tratado o la ley exigen para que se ejecuten en el país los efectos de dicha sentencia. En ese juicio no procede el debate sobre la relación sustancial que ha sido objeto de decisión por la sentencia extranjera. Las medidas de ejecución forzada de la sentencia extranjera a la que se ha otorgado el *exequatur*, deben perseguirse en una segunda etapa en la que se aplican las reglas comunes para la ejecución de sentencias argentinas.²⁹

3. *Omisión del juicio especial de exequatur*

Se reconoce generalmente que la sentencia produce tres efectos principales: *a)* el de la *cosa juzgada*; *b)* el de la *ejecución forzada* de sus decisiones; y *c)* el del *valor probatorio* respecto a los hechos ocurridos ante el juez y de que éste toma razón directa en el fallo, como asimismo de los elementos de hecho del mismo fallo (lugar y fecha, partes, persona del juez, firma, etcétera).

No hay duda alguna acerca de que un juicio especial y una sentencia de *exequatur* son indispensables para la *ejecución forzada* en el país de las decisiones contenidas en una sentencia extranjera, lo que implica la posibilidad de tener que recurrir al uso de la fuerza pública.

En lo que se refiere a hacer valer la autoridad de cosa juzgada como defensa o excepción procesal, el código dispone que cuando en un juicio

se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si satisface los requisitos exigidos para otorgar exequatur a una sentencia de ese origen (artículo 519), con lo que ha ratificado el criterio predominante en los tribunales bajo el código anterior.³⁰ Pero no está resuelto claramente si es necesario iniciar un juicio especial de *exequatur* o si la cuestión puede ser considerada por el juez ante el cual se invoca la autoridad de la cosa juzgada.

En cuanto a la fuerza probatoria de los elementos de hecho de las sentencias extranjeras, su aceptación depende del cumplimiento de los documentos públicos extranjeros, establecidos por la ley del país de donde proceden y por la ley argentina. La eficacia probatoria del documento, por otra parte, será apreciada por el juez ante el cual se presente, con entera libertad y de conformidad a las reglas generales sobre la prueba.

La opinión de los expertos en derecho procesal se inclina en favor de la tesis de que el juicio de exequatur no es necesario cuando la invocación de la sentencia extranjera no importa un acto de ejecución ni la pretensión de hacer valer la autoridad de la cosa juzgada, a menos que medie una razón de orden público para requerirlo.

4. *Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales*

Los principios y requisitos relativos al reconocimiento de sentencias extranjeras se aplican igualmente a los laudos arbitrales dictados en el extranjero,³¹ pero debe tenerse presente que la legislación argentina prohíbe que se sometan a árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción (artículo 764 Código procesal).³² Sin embargo, debe negarse ejecutoriedad a los laudos extranjeros que, en las legislaciones de origen, no constituyan títulos aptos para ser ejecutados.³³

5. *Requisitos para obtener el exequatur*

Examinamos a continuación los requisitos que deben satisfacer las sentencias extranjeras para lograr su reconocimiento. El examen se referirá a las reglas que rigen para la mayoría de los países, aplicándose reglas especiales para los que tienen celebrados tratados sobre la materia con la Argentina.³⁴

Los requisitos establecidos por el régimen común (artículo 517 código procesal), son los siguientes:

—que la sentencia

- a) tenga autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado;
- b) emane de tribunal competente en el orden internacional;
- c) sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero;
- d) no contenga disposiciones contrarias al orden público interno;³⁵
- e) reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional;
- f) no sea incompatible con otra pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal argentino.

—que la parte condenada, domiciliada en la República, hubiese sido personalmente citada.

—Que la obligación que haya constituido el objeto del juicio sea válida según las leyes argentinas.

- a. Ejercicio de una acción personal. Sentencia emanada de juez competente en la esfera internacional.

El Código procesal exige que la sentencia verse sobre una acción personal. Se expresa así, de una manera defectuosa, el requisito de que la sentencia emane de un juez competente en la esfera internacional, lo que debe resultar tanto de las leyes de su país como de las leyes argentinas;³⁶ no procede en cambio, discutir la competencia de orden interno por razón de la materia, división territorial, monto, etcétera.³⁷

Al excluir el reconocimiento de las sentencias extranjeras referentes a acciones reales, el legislador ha supuesto que la ejecución de tales sentencias recaerían sobre cosas situadas en forma permanente en Argentina, lo que es contrario al principio de que tales cosas están sujetas a las leyes argentina (artículos 10 y 11 Código civil) y las acciones reales sobre ellas a los tribunales del lugar donde esté situada la cosa litigiosa (artículo 5, código procesal). Se había señalado con razón que la técnica del código anterior era defectuosa pues, por un lado, pueden existir acciones personales a cuyo respecto los jueces argentinos sean competentes según las normas internacionales y, por el otro, acciones reales sobre cosas que hayan cambiado su ubicación jurisdiccional entre el comienzo del pleito y la ejecución de la sentencia,³⁸ objeciones que han sido tenidas en cuenta por el nuevo código al establecer que la sentencia extranjera puede ser consecuencia de una

acción real sobre un bien mueble trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero.

b. Ejecución de las sentencias dictadas en rebeldía del demandado domiciliado en la República.

Este requisito, derivado de la garantía constitucional del debido proceso (artículo 18 Constitución nacional), se aplica en favor de las personas que hayan tenido su domicilio en Argentina en el momento de iniciarse el juicio, pero no beneficia a quienes hayan adquirido ese domicilio después. Bajo el régimen de los tratados de Montevideo y del tratado con Italia, se admite la ejecución de las sentencias si la parte condenada ha sido legalmente citada y representada o declarada rebelde de conformidad a la ley del país donde se siguió el juicio.³⁹

c. Validez de la obligación según la ley argentina.

Según el artículo 14 del Código civil, las leyes extranjeras no son aplicables: 1º cuando su aplicación se oponga al derecho público o criminal de Argentina, a la religión del Estado, a la tolerancia de cultos, o a la moral y buenas costumbres; 2º cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de dicho código; 3º cuando fueren de mero privilegio; 4º cuando las leyes del código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más favorables a la validez de los actos.

Alrededor de este requisito de la conformidad de la sentencia extranjera con el orden público argentino y de los dos mencionados antes (competencia y garantía de defensa) han versado principalmente los numerosos fallos que se han pronunciado sobre la ejecución o reconocimiento de sentencias extranjeras sobre divorcio y otras cuestiones de familia.⁴⁰

d. Autoridad de cosa juzgada en el país de origen y validez formal del instrumento.

Para que una sentencia sea ejecutable en Argentina, debe ser firme y tener la autoridad de cosa juzgada según la ley del país de donde proviene. El examen de este punto por el juez argentino no supone una revisión total del procedimiento cumplido ante el tribunal extranjero, pues la ejecutoriedad de la sentencia debe surgir del propio instrumento, cuya validez formal se presume.⁴¹ A tal efecto, debe presentarse testimonio, debidamente legalizado por las autoridades de origen, con las autenticaciones del cónsul argentino y del Ministerio de Relaciones Exteriores, traducido por traductor público argentino, y ⁴² el testimonio debe contener no sólo la sentencia

extranjera sino también las demás piezas de las que resulte que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada (artículo 518 código procesal).

6. *Procedimiento del juicio de exequatur*

La ejecución de la sentencia extranjera debe pedirse al juez de primera instancia que deba entender según las reglas generales sobre la competencia (artículo 518, código procesal).

Se aplican al juicio de exequatur las normas relativas a los incidentes (artículo 518 código procesal), a saber: *a)* debe fundarse el pedido claro y concretamente en los hechos y en el derecho y ofrecerse toda la prueba de que intentare valerse; *b)* si el juez lo considerare manifiestamente improcedente, lo rechazará sin más trámite, siendo esta resolución apelable; *c)* si el juez admitiere el pedido, dará traslado por 5 días a la parte contra la cual deberá ejecutarse la sentencia extranjera y al fiscal; *d)* al contestar el traslado debe ofrecerse la prueba; *e)* si hubiere de producirse prueba que requiriese audiencia verbal, el juez la señalará para una fecha que no podrá exceder de 10 días, citará a los testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adoptará las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia; si no fuera posible su agregación antes de la audiencia, sólo será tenida en cuenta si se incorporase antes de dictarse resolución, cualquiera sea la instancia en que el juicio se encontrare; la audiencia podrá postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de 10 días, cuando hubiere imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella; la prueba pericial, cuando procediere, se llevará a cabo por un solo perito designado por el juez; no se admitirán más de cinco testigos por cada parte y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la jurisdicción del juzgado, cualquiera fuere el domicilio de ellos; *f)* contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio por el juez, o recibida la prueba en su caso, el juez, sin más trámite, dictará resolución (artículos 177/185 código procesal); *g)* la sentencia es apelable en relación y con efecto suspensivo; el recurso debe interponerse por escrito o verbalmente dentro del plazo de 5 días y fundarse en el término de 5 días de notificada la providencia que lo acuerde bajo pena de declararse desierto el recurso; del escrito se dará traslado a la otra parte por igual plazo (artículos 242/246 código procesal).

7. *Ejecución de la sentencia extranjera reconocida*

Si la resolución definitiva denegara el exequatur, se devolverá el instrumento al presentarse. Si, en cambio, se otorgara el exequatur, se procederá

en la forma establecida para la ejecución de las sentencias, como si se tratara de una sentencia dictada por tribunal argentino (artículo 518 id.). Los trámites varían según que se condene al pago de una cantidad líquida o al cumplimiento de una obligación de dar o de una obligación de hacer o no hacer.

Es en esta etapa que el demandado puede oponer las excepciones del artículo 506 del código procesal (falsedad de la ejecutoria, prescripción, pago, quita, espera o remisión) pero la excepción de falsedad de la ejecutoria parece en cierto modo descartada por el examen efectuado en el procedimiento de exequatur respecto a las formas de aquélla.⁴³

APÉNDICE

Conocimiento por los jueces argentinos del derecho extranjero

El tema del presente apéndice se vincula con el general de nuestro informe en razón de que conforme a autorizada doctrina, los jueces argentinos debieran conocer el derecho vigente en otro Estado por conducto de los jueces del mismo al hilo de la cooperación judicial internacional. Pero ella no es la única solución del problema del conocimiento del derecho extranjero para uso judicial en la Argentina.

En efecto, conforme al artículo 13 del Código Civil vigente en toda la República desde 1871, para que la ley extranjera pueda ser aplicada en ella son necesarios dos requisitos: 1) que su aplicación haya sido solicitada por parte interesada y 2) que dicha parte pruebe su existencia; ello, sobre la base harto discutible de que la ley extranjera constituye un simple *hecho* y que en tal carácter debe ser alegado y probado por el interesado. En cuanto a los medios de prueba, la jurisprudencia admite todos los legalmente permitidos.⁴⁴ con excepción de la confesión, el juramento y las presunciones.⁴⁵

En el mismo orden de ideas se estima que la forma más eficaz de probar una ley extranjera es acompañar un ejemplar de ella con un certificado de las autoridades del país respectivo que establezca su autenticidad, debiendo dicho certificado ser legalizado en la forma que ya conocemos.⁴⁶ Subsidiariamente, se admiten también los siguientes medios (teniendo presente la conveniencia de acumular dos o más de ellos):

a) Informes o certificados de los funcionarios diplomáticos o consulares argentinos acreditados en el país respectivo;

b) Informes o certificados de los funcionarios diplomáticos o consulares del país respectivo acreditados en la Argentina.⁴⁷

- c) Informes de juristas que acrediten preparación especializada.⁴⁸
d) Referencias de obras conocidas sobre el derecho del país respectivo.⁴⁹

Como excepción la ley extranjera puede ser aplicada sin que la parte interesada lo solicite o pruebe su existencia, cuando ella fuera obligatoria en Argentina por *convenciones diplomáticas o en virtud de ley especial*.⁵⁰ En tales casos la ley extranjera está, en cierto modo, incorporada al derecho argentino.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfonsín, Quintín: Cooperación judicial internacional, en LA LEY, 87-885.
- Alsina, Hugo: Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial 2a. ed., Buenos Aires, 1956/63, Ediar Soc. An. Editores, I-74/5 y 691/3, II-436/43 y V-161/181.
- Boggiano, Antonio: Derecho internacional privado, Buenos Aires, Depalma 1978.
- Colombo, Carlos J.: Código procesal civil y comercial de la Nación (anotado y comentado), Buenos Aires, 1975, Abelardo-Perrot, II-21 y ss.
- Fassi Santiago C.: Código procesal civil y comercial: comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, Astrea, 1971, II-224 y ss.
- Fernández, Raymundo I.: Código de procedimiento civil y comercial de la Capital de la Nación Argentina concordado y comentado), 2a., ed., 4a. reimpresión (corregida y actualizada), Buenos Aires, 1955, Edición del autor; I-79/82, 195/6 y 473/6.
- Goldschmidt, Werner: Suma de derecho internacional privado, 2a. ed. Buenos Aires, 1961, Abeledo-Perrot, págs. 96/7, 217/22 y 227/39.
- Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, El Derecho, 1970.
- Derecho Internacional Privado-Derecho de la tolerancia, 3a. edición, Buenos Aires, Depalma 1977, págs. 426 y ss.
- Derecho Internacional Privado en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en EL DERECHO, 19-852.
- Jofre, Tomás: Manual de procedimiento (civil y penal), 5a. ed., Buenos Aires 1941/3, Editorial LA LEY, I-214/5 y 381/7 y IV-306/11 y 316.
- Morelio Augusto M.,
Passi Lanza, Miguel A.,
Sosa Gualberto L. y
- Berizonce, Roberto: Códigos procesales en lo civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Librería Editora Platense, y Abeledo Perrot (1970-1979), V-37 y ss.
- Palacio Lino E.: Derecho Procesal Civil, Buenos Aires Abeledo-Perrot, 1975, II-194 y ss.
- Romero del Prado, Víctor N.: Derecho internacional privado, Córdoba, 1961, Ediciones Assandri, I-505/17, III-378/411 y 424/84.
- Serantes Peña, Oscar y

- Clavell Borrás Javier: Código Procesal civil y comercial y leyes complementarias (comentados y concordados), 3a. ed., Buenos Aires, 1963, Editorial Ethos, 52/4 y 558/62.
- Zuccherino, Ricardo M.: Derecho internacional privado, La Plata, Ed. Lex, 1976.

SECCION I

- Acuña Alfredo: Competencia del juez exhortado para regular honorarios, en *Jurisprudencia Argentina*, 48-231.
- Culaciatti Lonne, Miguel Angel: Exhortos o cartas rogatorias, en *Jurisprudencia Argentina*, 1959-VI-94.
- Díaz de Guijarro, Enrique: Las repreguntas en los exhortos, en *Jurisprudencia Argentina*, 1952-III-399.
- Goldschmidt, Werner: La lucha en torno a la tenencia de hijos en el orden internacional, en *Jurisprudencia Argentina*, 1961-V-74.
- Requisitos del auxilio judicial internacional, en *El Derecho*, 73-753.
- Citación de un litisconsorte pasivo en Mónaco, en *El Derecho*, 77-268.
- Lazcano, Carlos Alberto: Cuestiones de competencia en el exhorto extranjero, en *La Ley*, 71-298.
- Ley aplicable en un exhorto en materia de prueba, en *La Ley*, 79-519.
- Excepción de incompetencia en exhortos extranjeros en *Jurisprudencia Argentina*, 1953/II-374.
- Podetti, J. Ramiro: Tratado de la competencia, Buenos Aires, 1954, Ediar Soc. An. Editores, 55/63.
- Rabolini, Mario: Simplificación y ordenación del trámite de exhortos judiciales, en *La Ley*, 109-993.
- Romero del Prado. Víctor N.: Requisitos necesarios para el cumplimiento en la República de exhortos o cartas rogatorias de tribunales extranjeros, en *La Ley*, 44-749.
- Sentis Melendo. Santiago: Exhorto emanado de juez extranjero (cuestiones de competencia en ocasión de su diligenciamiento), en *Revista de Derecho Procesal*, año II (1944). 2a. parte. pág. 45-61.

SECCIÓN II

- Anastasi, Leónidas: Si los fallos de tribunales extranjeros pueden dar lugar a acciones en la República sin examen previo de parte de los jueces argentinos, en *La Ley*. 15-893
- Boggiano, Antonio: Jurisdicción internacional y competencia interna, en *Jurisprudencia Argentina*, 1975-II-195.
- Cárdenas, Emilio J.: Ejecución de sentencia extranjera. Nuevas aportaciones a la interpretación y alcance del inc. 2 del art. 559 del Código de Procedimientos en lo civil y comercial de la Capital Federal, en *Jurisprudencia Argentina*, 13 de marzo de 1967.
- Díaz de Guijarro. Enrique: Valoración, según la naturaleza del procedimiento, del título nupcial impugnado; ejecución de sentencia extranjera y declaratoria de herederos, en *Jurisprudencia Argentina*, 1952-IV-117.
- El título de estado de familia y sus efectos propios, en *Jurisprudencia Argentina*, 1955-IV-266.

- Ferne, Eduardo L.: Inscripción en el Registro Civil de sentencias de divorcio extranjeras, en *El Derecho*, 19-389.
- Goldschmidt, Werner: Repercusiones del matrimonio internacional fraudulento sobre el primer matrimonio argentino, en *La Ley*, 93-343.
- Divorcio vincular extranjero o matrimonio argentino durante la vigencia del divorcio vincular en la República, en *La Ley*, 97-825.
- Incorporación de matrimonios extranjeros, en *La Ley*, 99-988.
- Inscripción de documentos extranjeros de matrimonio, en *La Ley*, 100-543.
- La defensa de la indisolubilidad del matrimonio argentino en las recientes reglamentaciones del Registro del Estado Civil y en las actividades consulares, en *El Derecho*, 8-926.
- Ejecución en la Argentina de sentencias extranjeras dictadas a raíz de demandas notificadas en la República al demandado por el abogado del actor y pronunciadas en rebeldía de aquel, en *El Derecho*, 18-430.
- Problemas suscitados por el exequatur de la anulación yugoslava de un matrimonio, en *La Ley*, 118-183.
- Exequátur de un laudo alemán, en *El Derecho*, 41-696.
- ¿Puede el derecho argentino vigente tal cual lo aplica una sentencia extranjera infringir el orden público interno argentino?, en *El Derecho*, 79-300.
- Guastavino, Elías P.: Inscripción en el Registro Civil del matrimonio celebrado en el extranjero con impedimento de ligamen, en *Jurisprudencia Argentina*, 1960-II-540.
- Aspectos internacionales de los alimentos entre cónyuges divorciados, en *La Ley*, 129-487.
- Lazcano, Carlos Alberto: El cumplimiento de sentencias extranjeras, en *Jurisprudencia Argentina*, 48-929.
- Las sentencias extranjeras y el exequatur judicial en *Jurisprudencia Argentina*, 51, secc. doctr., 6.
- Los requisitos para la ejecución de sentencias extranjeras, en *Jurisprudencia Argentina*, 72, secc. doctr., 82.
- Los alimentos provisionarios y el divorcio dictado en el extranjero, en *Jurisprudencia Argentina*, 1942-III, Secc. doctr., 20.
- La sentencia extranjera y la quiebra en la Argentina, en *Jurisprudencia Argentina*, 1956-III-448.
- Inscripción de matrimonios extranjeros, en *La Ley*, 99-988.
- Exequatur para partidas extranjeras de matrimonio, en *La Ley*, 100-87.
- López del Carril, Julio J.: Inscripción de partidas de matrimonio extranjeras en el Registro Civil, en *Jurisprudencia Argentina*, 1961-II-584.
- Moretti, Raúl: La sentencia extranjera, en *La Ley* 15, secc. doctr., 84.
- Orus Manuel: Reconocimiento de divorcios, en *Jurisprudencia Argentina*, septiembre 9-1965.
- Passi Lanza, Miguel A.: Sobre las pautas que gobiernan la viabilidad de la ejecución de la sentencia extranjera, en *La Ley*, 126-108.
- Podetti, J. Ramiro: Tratado de las ejecuciones, Buenos Aires, 1952, Ediar Soc. An. Editores, págs. 474/87.
- Perassi, T.: La determinación de la competencia del juez argentino según la convención italo-argentina, en *Revista de Derecho Procesal*, 1958, 4º, 1.

- Ramella, Pablo A.: Si las sentencias extranjeras producen el efecto de *cosa juzgada*, en *Revista Crítica de Jurisprudencia*, 1933, 17.
- Romero del Prado, Víctor N.: Ejecución de sentencias extranjeras: el artículo 559 del código de procedimientos civiles de la Capital Federal, en *La Ley*, 50-964.
- Satanowski, Marcos. Efecto extraterritorial de la sentencia dictada por el juez de la residencia del insano, en *Revista Crítica de Jurisprudencia*, I-166.
- Sentis Melendo, Santiago: La sentencia extranjera. Naturaleza procesal del exequatur (Notas para su estudio), en *Revistas de Derecho Procesal*, año II (1944), 2a. parte, 221.
La sentencia extranjera Exequatur, Buenos Aires 1958, Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Simons, Walter: Sentencias extranjeras, su reconocimiento y ejecución, en *Revista del Colegio de Abogados*, Buenos Aires, 1921, 668.
- Videla Aranguren, José María: Ejecución de sentencias extranjeras en *Jurisprudencia Argentina*, 72-470.

APÉNDICE

- Alcorta, Carlos Alberto: Nota en *Jurisprudencia Argentina*, XII-315.
- Borda, Guillermo A.: Tratado de derecho civil argentino-parte general. Ed. Perrot, Buenos Aires, 1970, I-187.
- Busso Eduardo B. y otros: Código civil anotado, Buenos Aires, 1958, Ediar Soc. An. Editores, I-114/25.
- Ennis Humberto M.: Aplicación del derecho extranjero en la República Argentina conforme a la ley, doctrina y fallos, en *Revista Jurídica de la Prov. de Buenos Aires*, N° 6, 1951, pág. 7 y sigs.
- Gattasi, Carlos Nicolás: La ley extranjera como hecho notorio, en *El Derecho*, 36-913.
- Herrera, Luis Fernando: La aplicación del derecho extranjero, en *Del actual pensamiento jurídico argentino*, Buenos Aires, 1955, Ediciones Arayú, págs. 297/334.
- Llambias, Jorge J.: Derecho civil-Parte general, Buenos Aires, 1973, ed. Perrot, I-154 y ss.
- Mordegliá, Eugenio: Aplicación e interpretación de las leyes extranjeras, en *Anales de la Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de la Plata*, t. VIII 1935/7, págs. 338/93.
- Rey, Ricardo F.: La aplicación de la ley extranjera y el derecho internacional privado de ley, en *Revista de la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales*, Buenos Aires, t. V, N° 16, 1926 pág. 889, y ss.
- Salvat Raymundo M.: Tratado de derecho civil argentino-Parte general, 10a. ed., Buenos Aires, 1954, Tipográfica Editora Argentina, I-201/3.
- Sentis Melendo, Santiago; Aplicación de la ley extranjera, en *Revista de Derecho Procesal* año VII (1949), 2a. parte, pág. 201/61.
- Sosa, Gualberto L.: La prueba de las normas jurídicas y la reforma procesal, en *La Ley*, 132-1222.

ARGENTINA

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

(Ley 17.454, sancionada el 20 de septiembre de 1967)

LIBRO I - Disposiciones Generales

Título I. Órgano Judicial

Capítulo I. Competencia

Artículo 3. Indelegabilidad. La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.

Título III. Actos Procesales

Capítulo V. Oficios y Exhortos

Artículo 132. Comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras o de éstas. Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhorto. Tales comunicaciones, así como las que se reciban de dichas autoridades, se regirán por lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales y en la reglamentación de superintendencia.

LIBRO III - Procesos de ejecución

Título I. Ejecución de sentencias

Capítulo II. Sentencias de tribunales extranjeros

Artículo 517. Procedencia. Las sentencias de los tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan.

Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurrieren los siguientes requisitos

1o. Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de tribunal competente en el orden internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal, o de

- una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero.
- 2o. Que la parte condenada, domiciliada en la República, hubiese sido personalmente citada.
 - 3o. Que la obligación que haya constituido el objeto del juicio sea válida según nuestras leyes.
 - 4o. Que la sentencia no contenga disposiciones contrarias al orden público interior.
 - 5o. Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada, y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional.
 - 6o. Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un tribunal argentino.

Artículo 518. Competencia. Recaudos. Sustanciación. La ejecución de la sentencia dictada por un tribunal extranjero se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma.

Para el trámite del exequatur se aplicarán las normas de los incidentes.

Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos.

Artículo 519. Eficacia de sentencia extranjera. Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del artículo 517.